



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**Asunto:** Acción de tutela No. 2020-0151  
Sentencia Primera Instancia

**Fecha:** 30 de junio de 2020

De conformidad con lo establecido en el artículo 29 del Decreto Nacional 2591 de 1991 se emite sentencia de primer grado en la actuación de la referencia.

**1.- Identificación del solicitante:** (Art. 29 Núm. 1 D. 2591/91):

Martin Francisco Unda Ramírez, identificado con C.C. No. 79.125.387, quien actúa en nombre propio.

**2.- Identificación de quien provenga la amenaza o vulneración:** (Art. 29 Núm. 2 D. 2591/91):

La actuación es dirigida contra el Juzgado Octavo (8) Civil Municipal De Bogotá D.C., Dirección Ejecutiva Seccional De Administración Judicial De Bogotá D.C. – Archivo General De Bogotá – Cundinamarca.

Se ordenó vincular al Banco AV Villas.

**3.- Determinación del derecho tutelado:** (Art. 29 Núm. 3 D. 2591/91):

El accionante indica que se trata del derecho a la información, de petición y propiedad privada, en conexidad con la vida digna y la igualdad.

**4.- Síntesis de la demanda:**

- a) *Hechos:* Manifiesta el accionante que, en el año 2009, adquirió una deuda con la entidad Bancaria Av Villas. La cual inició un proceso judicial para el cobro ejecutivo bajo el radicado 2011 – 184, donde solicitó el embargo sobre el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C – 726269.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

La deuda fue cancelada en su totalidad en el año 2012, como se prueba con el paz y salvo de fecha 11 de febrero de 2014, expedido por la entidad bancaria. En el año 2013 el Juzgado 8 Civil Municipal de Bogotá, da por terminado el proceso por pago, elaborándose oficio de desembargo de fecha nueve de diciembre de 2013. No obstante, el accionante no conocía de la existencia del proceso, por lo que no pudo realizar trámite con anterioridad.

Se entera de la existencia del embargo al intentar vender el inmueble. Sin embargo, al establecer comunicación con la entidad, el Banco le informa que debe acudir al juzgado. Por lo que consultada la página de la rama judicial encuentra que el proceso se encuentra archivado, razón por la cual solicita el desarchivo del mismo el 11 de septiembre de 2019.

Pasados 5 meses de haber realizado la solicitud de desarchivo y sin obtener respuesta alguna, radica derecho de petición en el que solicita celeridad en la entrega del documento. Cumplido el término legal para obtener contestación tampoco fue recibida.

- b) *Petición:* Una vez se realice la reapertura de los complejos judiciales, se le entregue el oficio de desembargo para iniciar el trámite de levantamiento de la medida cautelar. De no ser posible, se ordene al Juzgado 8 Civil Municipal de Bogotá inicie directamente el trámite de levantamiento de la medida cautelar ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, tal y como se profirió el oficio de embargo.

**5- Informes:** (Art. 19 D.2591/91)

- a) Juzgado 8 Civil Municipal de Bogotá D.C.

Informó ese Juzgado conoció del proceso ejecutivo de Banco Av. Villas contra el accionante, con radicado 2011 – 184, el cual terminó por pago total de la obligación mediante auto del 22 de noviembre de 2013. Elaborándose el oficio de desembargo el 9 de diciembre de 2013. Sin embargo, revisado el sistema de consulta de procesos de la rama judicial se constató que fue archivado de manera definitiva el 26 de octubre de 2015, en la caja 150 de 2014.

De igual manera, verificada por la secretaria no se encontró solicitud de desarchivo elevada por el accionante, a su vez, el formato de petición de desarchivo del proceso arrojada, no



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

aparece radicada ante ese Juzgado, de modo que no existe omisión de su parte que vulnere las prerrogativas invocadas en el libelo de amparo.

b) Banco Comercial Av Villas S.A

Manifestó que, una vez verificadas sus bases de datos, evidenció que el Señor Martín Francisco Unda Ramírez, suscribió el crédito No. 1065447 – SBG-73086704 con el Banco Comercial AV Villas S.A., el cual fue aprobado y desembolsado en el año 2009. Ante la continua condición de mora que para el año 2011 presentaba el Señor Martín Francisco Unda Ramírez respecto al pago de sus obligaciones crediticias, el Banco Comercial AV Villas S.A. hizo exigible el pago total de este crédito, por lo que interpuso demanda ejecutiva, la cual le correspondió conocer al Juez 8° Civil Municipal de Bogotá y se le asignó el Rad. No. 2011-00184-00.

Dentro del Proceso Ejecutivo seguido contra el accionante, se libró mandamiento de pago el 18 de febrero de 2011, se notificó al demandado por aviso como quedó constatado mediante auto 29 de noviembre de 2011, se profirió Sentencia el 11 de enero de 2012 y se aprobó la liquidación del crédito el día 19 de febrero de 2013, todas estas actuaciones, se aclara, fueron debidamente notificadas y conocidas por las partes.

Hacia finales del año 2012, el Señor Martín Francisco Unda Ramírez llegó a un acuerdo de pago con el Banco AV Villas S.A., de esta forma consignó la suma acordada equivalente a CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE- \$5'800.000, oo, con lo cual quedó cancelada totalmente la Obligación No. 1065447 – SBG-73086704, por ende, se solicitó ante el Juzgado 8° Civil Municipal de Bogotá la terminación del Proceso Ejecutivo con Rad. No. 2011-00184-00; despacho que mediante el Auto de 22 de noviembre de 2013 la decretó y ordenó adicionalmente, el desembargo de los bienes que fueron objeto de las medidas cautelares, indicando que los respectivos oficios se expedirían a favor del demandado, es decir, del Señor Martín Francisco Unda Ramírez.

En este punto, tal como señala la providencia de 22 de noviembre de 2013, notificada por estado de 26 de noviembre de 2013, en concordancia con el artículo 537 del Código de Procedimiento Civil -vigente para la época- es el demandado el legitimado para llevar a cabo el trámite de levantamiento y cancelación de las medidas cautelares vigentes al momento de



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

la terminación del proceso ejecutivo, en razón a que esta terminación se dio como consecuencia del pago total de la obligación crediticia, lo que traduce en que es el único facultado para recibir los oficios pertinentes y proceder a su respectiva radicación ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos

c) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca

Se informó que analizados los hechos que motivan la acción constitucional, se logró establecer que esa Seccional, con apoyo del Grupo de Archivo Central procedió a la búsqueda del proceso, el cual emitió certificación de fecha veintitrés (23) de junio del presente año, en la que indica que el proceso 2011- 184, fue hallado y será puesto a disposición del Juzgado competente una vez cesen los efectos del Decreto Numero 457 de 2020, y consecuentemente se permita el ingreso a la sede de Archivo Central, ubicada en el Edificio Hernando Morales Molina.

Dicha información se puso en conocimiento del accionante mediante correo electrónico mur\_777@hotmail.com de fecha veintitrés (23) de junio de los corrientes, por ser este medio el más expedito para hacer llegar información

Así las cosas, si lo pretendido por el accionante era el desarchive del proceso 2011-184 objeto de estudio, como quiera que ello ya ocurrió, no existe vulneración actual de los derechos deprecados, pues la causa que dio origen al presente amparo desapareció, según la certificación allegada por el área de archivo central. Por consiguiente, es evidente la improcedencia del amparo por carencia actual de objeto, en tanto se configura en el caso el fenómeno de hecho superado.

Por lo anterior, solicitó se deniegue la presente Acción de Tutela, pues aduce es claro que no se configura la presunta vulneración de los derechos alegados por el accionante.

**6.- Pruebas:**

Las documentales existentes en el proceso.

**7.- Problema jurídico:**



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

¿Existe vulneración a los derechos deprecados por el accionante por cuenta de las entidades accionadas?

**8.-Derecho de petición:**

En relación con el derecho de petición, se tiene que el mismo está catalogado como fundamental de aplicación inmediata, según el artículo 85 de la Constitución Política y está definido en el artículo 23 ibídem como el que tiene toda persona a presentar peticiones a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

Es así, que mediante precedente jurisprudencial, la Corte Constitucional ha fijado características especiales, que buscan la resolución y protección inmediata de este derecho fundamental, donde ha considerado que el núcleo esencial de este derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; En este sentido, esa Corporación ha manifestado en varios pronunciamientos como la sentencia T- 377 de 2000 reiterada por la sentencia T-161 de 2011, T-146 de 2012, y más recientemente la T-149 de 2013 y más recientemente en pronunciamiento en sentencia T- 139 de 2017 MP Gloria Stella Ortiz Delgado, que indicó:

*“...19.- De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política “[t]oda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.”*

*La Corte ha señalado, en reiteradas oportunidades, que el derecho fundamental de petición es esencial para la consecución de los fines del Estado tales como el servicio a la comunidad, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y la participación de los ciudadanos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas.[34]*

*20. Asimismo, esta Corporación ha indicado que el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes elementos que constituyen su núcleo esencial[35]: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la prontitud y oportunidad de la respuesta, es decir, que se produzca dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible[36]; (iii) la emisión de una respuesta clara, precisa y de fondo, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iv) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, al margen de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido[37]...”*



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**9.-Procedencia de la acción de tutela para protección del derecho fundamental de petición:**

*a.- Fundamentos de derecho:* En materia de derecho de petición la Corte Constitucional ha decantado que la protección por acción de tutela de dicha garantía no está sujeta a requisitos generales o especiales como lo recuerda en la sentencia T – 451 de 2017 que en lo pertinente dice:

**“2.2. Subsidiariedad**

*24. La jurisprudencia de esta Corporación<sup>1</sup> ha sido consistente en señalar que cuando se trata de proteger el derecho de petición, el ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo.*

*25. En tal sentido, quien encuentre que la respuesta a su derecho de petición no fue producida en debida forma, ni comunicada dentro de los términos que la ley señala, y que en esa medida vea afectada esta garantía fundamental, puede acudir directamente a la acción de amparo constitucional”.*

*b.- Verificación de requisitos generales para el caso concreto:* En lo referente a **legitimación en la causa**, se evidencia que la accionante radicó derecho de petición ante Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá D.C y Cundinamarca.

En el apartado de **subsidiariedad** se verifica dado que se trata de la protección al derecho fundamental de petición que no tiene otro mecanismo de protección, se encuentra habilitado para acudir a la acción de tutela para remediar su situación de desamparo, de modo que los pedimentos pueden ser elevados al interior de la actuación judicial como se verá a continuación.

**10.- Consideraciones probatorias y jurídicas:**

**a.- Normas aplicables:** Resulta pertinente indicar que la Corte Constitucional creó el concepto de carencia actual de objeto para aquellos casos cuando se constata un hecho superado, el cual se presenta cuando cesa o se supera lo pretendido con la acción de tutela, tal como fue señalado en la sentencia T-523 de 2011:.

---

<sup>1</sup> Consultar: Corte Constitucional, Sentencias T-149 de 2013, T-165 de 2017.



### **Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

*“El objetivo de la acción de tutela es la protección efectiva, cierta e inmediata de los derechos fundamentales, presuntamente vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en concordancia con el artículo 86 de la Carta Política y el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991.*

*Por esta razón, es necesario que exista un sujeto determinado, titular de derechos fundamentales, una conducta de una autoridad pública o de un particular que vulnere o amenace los derechos de rango constitucional. Lo anterior, para efectos de que la acción de tutela proceda y el juez constitucional pueda valorar el caso concreto y llegar a una solución encaminada a proteger o restaurar la amenaza o vulneración.*

*Ciertamente, los derechos no son otra cosa que facultades radicadas en cabeza de personas naturales o jurídicas, por lo cual su existencia no se presenta por sí misma, como una realidad ontológica autónoma o independiente, sino que sólo se da como consecuencia de la de un titular de tales facultades subjetivas<sup>2</sup>.*

*El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 hace alusión a la improcedencia de la acción de tutela, “cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho”. Sin embargo, el parágrafo del artículo 29 del mencionado decreto lo señala, el fallo de tutela no puede ser inhibitorio, por lo cual el juez de tutela no puede eximirse de realizar un análisis de fondo sobre el caso concreto. De ahí que, la Corte Constitucional haya creado el concepto de “carencia actual de objeto”, que puede configurarse por la ocurrencia de un hecho superado o de un daño consumado.*

*Así, se presenta un hecho superado cuando cesa, desaparece o se supera el objeto jurídico de la acción de tutela, porque se restauró el derecho fundamental amenazado o vulnerado, impidiendo que “el juez de tutela entre a emitir una orden respecto de la situación fáctica que impulsó la interposición de la acción.”<sup>3</sup> Lo cual no implica, tal como se dijo anteriormente, que el juez de tutela profiera un fallo en el cual deba pronunciarse sobre la configuración de un hecho superado y cómo se reparó el derecho, por lo que el hecho superado debe ser probado.”*

*“No obstante, resulta pertinente establecer la oportunidad procesal en la cual el supuesto de hecho se superó o dejó de existir, porque desde el punto de vista procesal, tiene ciertas implicaciones para el fondo del fallo, esto es si fue “i) antes de iniciado el proceso ante los jueces de instancia o en el transcurso de los mismos, o ii) estando en curso el trámite de revisión ante la Corte Constitucional.”<sup>4</sup>*

*En ese sentido, si el fundamento fáctico se superó antes de iniciado el proceso de tutela ante los jueces de instancia o en el trámite de la misma, corresponde al juez constitucional declarar la improcedencia de la misma, en virtud de lo establecido en el artículo 6 numeral 4 del Decreto 2591 de 1991, debiendo verificar: i) si se trata de un hecho superado, cómo cesó la vulneración de los derechos fundamentales invocados, o ii) de tratarse de un daño consumado, declarar la improcedencia, analizando la existencia de la consumación del daño. Por su parte, la Corte en sede de revisión, deberá confirmar el fallo revisado, quedando facultada para pronunciarse de realizar un examen adicional relacionado con la materia de la que trata el caso concreto, con la finalidad de unificar jurisprudencia<sup>5</sup>.*

*Pero si se superó o consumó el daño en el curso del trámite de revisión ante la Corte Constitucional, la Sala de Revisión deberá analizar el caso concreto y advertir si en el trámite ante los jueces de instancia se cumplió debidamente con las reglas jurisprudenciales, se aplicó adecuadamente las normas vigentes y dependiendo del caso conceder o revocar el amparo de los derechos fundamentales, sin importar, si al tratarse de un daño consumado no proceda a impartir orden alguna. Tal como se consagró en la SU-540 de 2007:*

<sup>2</sup> Sentencia T-277 de 2008.

<sup>3</sup> Sentencia T-449 de 2008.

<sup>4</sup> Sentencia T-449 de 2008, SU-540 de 2007.

<sup>5</sup> Ver entre otras, Sentencias T-428 de 1998, T-107 de 2007, T-449 de 2008 y T-495 de 2010.



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*Entonces, sobre el particular se puede enunciar como regla general que a.) si la Corte encuentra que la decisión se profirió conforme a la Constitución Política y a la jurisprudencia, confirmará el fallo; b.) si verifica que sí hubo una vulneración, o que la tutela era procedente, revocará la decisión y señalará que aunque se habría concedido la tutela, se presentó un daño consumado con la muerte del actor, con lo que se configura la carencia de objeto y así lo declarará, previo su pronunciamiento de fondo, para determinar el alcance de los derechos vulnerados (en armonía con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991) y emitirá la orden de compulsar copias de la sentencia y del expediente a las autoridades correspondientes para eventuales investigaciones, si fuera del caso. (Subrayado y negrilla fuera de texto)<sup>6</sup>. ””*

**b.- Caso concreto:** Revisado el trámite tutelar, se advierte que el reproche de la accionante es la no respuesta al derecho de petición radicado el 12 de febrero de 2020, en el que solicitó se dé trámite a la solicitud de desarchivar, como quiera que requiere el retiro de los oficios de embargo.

En tal sentido, se debe indicar que conforme el informe entregado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca se acreditó que fue remitido mediante correo electrónico respuesta a su petición, en la que se informó sobre el desarchivar del proceso. Por lo anterior, se tiene que el derecho de petición ya fue contestado, cumpliendo la respuesta entregada los requisitos de fondo y clara, estar comunicada a su vez al peticionario.

En consecuencia, encuentra este Despacho que estamos en presencia de la figura jurídica de un hecho superado, en virtud que el motivo de presentación de la acción de tutela desapareció, configuración que el Alto Tribunal Constitucional definió en sentencia T - 146 de 2012 M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, así:

*“Esta Corporación ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado.<sup>7</sup>”*

*En la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que“(…) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”*

*En este orden de ideas, se ha entendido que la decisión del juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, se encuentra que la situación expuesta en la demanda, que había dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acción, ha cesado, desapareciendo así toda posibilidad de amenaza o daño a los derechos fundamentales.*

*De este modo, se entiende por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que*

---

<sup>6</sup> Sentencia SU-540 de 2007.

<sup>7</sup> Ver sentencias T-1100/04, T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006, T-431 de 2007



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

*demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado.*<sup>8</sup>

Por consiguiente, el Despacho negará la acción de tutela impetrada por hecho superado, conforme las razones expuestas.

No obstante, se insta a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá y Cundinamarca, así como al Juzgado Octavo (8) Civil Municipal De Bogotá D.C., se realicen los trámites pertinentes para que el accionante pueda tener acceso al expediente y a los oficios de desembargo, sin perjuicio que sea de manera electrónica, conforme los Acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, cada una en el ámbito de sus competencias. Esto una vez se permita el ingreso de manera segura a las sedes judiciales, en atención a la emergencia sanitaria que atraviesa el país.

Por último, ha de indicarse al accionante que es a él a quien debe realizar las gestiones para el correspondiente levantamiento de la medida cautelar, correspondiendo lo mismo a una actuación de la parte interesada.

En consecuencia, el Juzgado Diecisiete (17) Civil del Circuito de Bogotá D.C., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

**PRIMERO: NEGAR** el amparo de tutela presentado por **MARTIN FRANCISCO UNDA RAMÍREZ**, identificado con C.C. No. 79.125.387, quien actúa en nombre propio, por carencia de objeto por hecho superado, contra el **JUZGADO OCTAVO (8) CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C., DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. – ARCHIVO GENERAL DE BOGOTÁ – CUNDINAMARCA.**

**SEGUNDO: NOTIFICAR** lo aquí resuelto a las partes por el medio más expedito y eficaz de acuerdo con lo preceptuado por el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

---



**Juzgado Diecisiete Civil del Circuito de Bogotá, D.C.**

Carrera 10 No 14 – 15 piso 15 – Telefax: 282 0030 – Bogotá – Colombia  
Correo: ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**TERCERO: REMITIR** el expediente a la Honorable Corte Constitucional para eventual revisión, en el evento que no se impugne la presente decisión.

**NOTIFÍQUESE,**

**CESAR AUGUSTO BRAUSÍN ARÉVALO**

**JUEZ**

**PZT**